

COLOMBIA: En el marco del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que sesionó en Cartagena, el presidente Álvaro Uribe aseguró que en Colombia no hay espacio para conceder amnistía o indulto a las guerrillas, en un eventual proceso de paz. Dijo el mandatario que “no es posible distinguir entre el guerrillero y el paramilitar para dar un tratamiento mas favorable a cualquiera de los dos”, y puntualizó que la misma ley de justicia y paz que rige para los paramilitares desmovilizados regirá para las guerrillas que se desmovilicen. Por su lado, el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, reclamó a la sociedad y en especial al empresariado un mayor compromiso para ayudar a la “resocialización” de 50.700 ex integrantes de grupos armados que a la fecha se han desmovilizado., Dijo el alto funcionario que la pasividad y la indiferencia social frente a estas realidades, pueden hacer fracasar los esfuerzos del gobierno de desarmar a los violentos, y se corre el riesgo de que los desmovilizados retornen a las armas y a las prácticas violentas si no se les ofrecen oportunidades. Al margen de este evento, el Alto Comisionado para la Paz reveló haber firmado una Carta de Intención con el Asesor Presidencial para la Paz de Filipinas, con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con las mutuas experiencias de construcción de paz, de implementar iniciativas de cooperación técnica que beneficien la búsqueda de la paz en los dos países, y compartir lecciones que resulten de la facilitación de otros países y de organizaciones internacionales con otros países que enfrenten retos similares a los de Colombia y Filipinas. *El Tiempo, CMI – Tv, Presidencia, 08 – 15/05/09*

El Cardenal Darío Castrillón, quien preside la Comisión Pontificia Iglesia Hoy, reveló desde el Vaticano haber recibido sendas llamadas telefónicas de portavoces de las guerrillas de las FARC y del ELN, en las que le expresaron su voluntad para trabajar en la búsqueda de caminos de solución política al conflicto social y armado. El prelado dijo que conversó sobre este tema con el presidente Uribe, quien se mostró receptivo y le pidió que continuara en esta labor de buscar acercamientos con las guerrillas. Entretanto, el Comando Central de la guerrilla del ELN, en su carta de respuesta dirigida a Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), plantea que no habrán temas vedados en el marco de un eventual proceso de diálogo y negociación, y puntualizó su disposición a que se trate en la mesa los temas del secuestro, la desaparición forzada y los presos políticos. En la misiva insisten en que todos los sectores de la sociedad deben tener un papel protagónico, al momento de construir los contenidos para la solución política. Finalmente advierten que no aceptarán ningún tipo de precondiciones, en alusión directa a la interpuesta por el anterior Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quien exigió la concentración de los combatientes y militantes del ELN y sus correspondientes identificaciones, para materializar un cese de fuegos y hostilidades. *El Colombiano, Insurrección - ELN, CMI – Tv, 08 – 15/05/09*

Honda preocupación ha causado en los familiares de los prisioneros en poder de la guerrilla de las FARC, como también en el seno del movimiento de CCP, las declaraciones del presidente Uribe de no autorizar los buenos oficios de la senadora Piedad Córdoba y de CCP, para la liberación unilateral anunciada por las FARC del cabo Pablo Emilio Moncayo, y la orden que diera el mandatario a las Fuerzas Armadas de persistir en el rescate de todos los cautivos. Por su lado el profesor Gustavo Moncayo, conocido como el “caminante de la paz” y padre del cabo Pablo Emilio, dijo que la orden del presidente conducirá a su hijo y demás prisioneros a una muerte segura y anunció que pedirá a la comunidad internacional para que ayuden a que la liberación anunciada se haga en un país vecino. Por su lado la senadora Piedad Córdoba, quien prepara un viaje a los EEUU para entrevistarse con los jefes paramilitares, que son juzgados por delitos de narcotráfico por la justicia de ese país, quienes la invitaron a que los escuche e interponga sus buenos oficios a fin de que la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia pueda ser conocida, dijo que continuará en sus gestiones humanitarias, al tiempo que defendió su labor la que caracterizó como política pero no electoral, porque no hay nada mas político que contribuir a la paz de Colombia. La parlamentaria dijo que las liberaciones “a cuentagotas” por

parte de las FARC pueden generar un desgaste innecesario, que se evitaría si se pactara un acuerdo humanitario para lograr la liberación de todos los cautivos de una sola vez, e invitó a las partes a crear las condiciones para ello. *Caracol – Radio, Telesur – Tv, Aporrea, El Tiempo, El Espectador, 08 – 15/05/09*

El presidente Álvaro Uribe se reunió en su despacho con los Magistrados de las Altas Cortes (Suprema de Justicia, Constitucional, Concejo de Estado), en respuesta a la solicitud que estos le hicieran de pronunciarse públicamente frente a las interceptaciones telefónicas y seguimientos del DAS, con una actitud dialogante el mandatario se comprometió a que este tipo de prácticas ilegales no se sigan cometiendo por parte del máximo organismo de seguridad del Estado. Entretanto, el jefe de Contrainteligencia del DAS, el capitán ® Jorge Lagos, reveló ante la Fiscalía que los informes sobre las conversaciones grabadas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizadas por el DAS, eran entregados al ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria y al Secretario General de Presidencia Bernardo Moreno. El alto funcionario del DAS solicitó al ente acusador que vincule a su familia al programa de protección de testigos, para así poder revelar toda la información que tiene en su poder. De otra parte, fue capturada la senadora Zulema Jattin, quien junto con los senadores Julio Manzur y Habib Merheg, deberán comparecer ante los tribunales por sus vínculos con el paramilitarismo en la Costa Norte colombiana. Los tres parlamentarios presentaron sus respectivas dimisiones al Congreso, para así poder ser investigados por la Fiscalía, de quien aspiran tener un trato mas benévolo. Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inició investigación contra los senadores Jorge Visbal Martelo y Marco Alirio Cortés, por similares cargos que los tres anteriores. Los cinco parlamentarios hacen parte de las fuerzas políticas que apoyan al presidente Uribe. Finalmente, un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía revela que a la fecha 426 militares han sido detenidos por ejecuciones extrajudiciales, en el marco del escándalo que cubre a las Fuerzas Armadas por los llamados “falsos positivos”. En total los procesos abiertos ascienden a 1.009, en los que están involucrados 1.666 militares. *El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, Semana, 08 – 15/05/09*

El abogado estadounidense Terry Collinworth, apoderado de un grupo de familias víctimas del paramilitarismo, interpuso demanda penal contra la multinacional bananera Dole en una Corte de Los Ángeles, por haber ordenado el asesinato de 57 sindicalistas colombianos. La multinacional Dole, de capital estadounidense, habría pagado cuantiosas sumas de dinero a los grupos paramilitares de la región de Urabá y del departamento del Magdalena como contraprestación por estos crímenes. Este mismo abogado fue el que entabló una querrela contra la también multinacional bananera Chiquita Brands, la cual fue declarada culpable y condenada a pagar una multa de 24 millones de Dólares por patrocinar económicamente y con suministro de armas las actividades de grupos paramilitares en Colombia, a cambio de seguridad para sus funcionarios e instalaciones. De otra parte, una comisión de eurodiputados luego de reunirse con grupos de colombianos y defensores de derechos humanos, hicieron una declaración en la que solicitan a los países de la UE, para que de una vez por todas los derechos humanos en Colombia sean una prioridad para Europa, y se presione para que paren los asesinatos de indígenas y líderes sindicales. Por su lado el presidente y el vicepresidente Álvaro Uribe y Francisco Santos, respectivamente, dijeron que desde el exterior pagan a abogados que levantan falsas acusaciones contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas y que existe una estrategia “bien montada” en Inglaterra y EEUU, países donde abogados colombianos, sindicatos, ONG’s y políticos de izquierda conspiran para desprestigiar al país. Entretanto el ciudadano Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, denunció que los paramilitares de las “águilas Negras” han amenazado a los funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que desarrolla este organismo como mecanismo de defensa de la población civil. Finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Bolívar, denunció el asesinato de la dirigente sindical del sector salud Vilma Carcamo Blanco en la población de Magangué, a manos de grupos paramilitares. Con este crimen se elevan a 17 los asesinatos de sindicalistas en el curso de este año y a 2.711 los sindicalistas asesinados en los últimos 10 años en Colombia. *Telesur – Tv, Oidhaco - Web, CUT – Web, 08 – 15/05/09*